

# Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 3

SENTENCIA INTERLOCUTORIA

EXPEDIENTE NRO: 8972/2019

AUTOS: "BERENSTEIN, JORGE c/ ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS s/IMPUGNACION DE DEUDA"

Buenos Aires,

**EL DOCTOR MARTIN LACLAU DIJO:**

En las presentes actuaciones, Administración Federal de Ingresos Públicos resolvió, a fs.22, desestimar la impugnación efectuada por el accionante.

De las constancias de autos se desprende que el impugnante no cumplió con el depósito exigido por el art. 15 de la ley 18.820, no acreditando la imposibilidad económica de efectuar el mismo.

Al respecto, cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al fallar, el 10 de octubre de 1985, en autos Villar Hnos. y Cía SRL sostuvo que "si bien la exigencia de depósito previo como requisito para la viabilidad del recurso judicial contra decisiones administrativas no importa, de por sí, una restricción inconstitucional a las garantías de igualdad y defensa en juicio, tal doctrina no resulta aplicable a los supuestos en que la imposición del depósito fuese desproporcionada con relación a la concreta capacidad económica del apelante, tornando por ello, ilusorio su derecho de defensa" (cfr. Derecho del Trabajo, 1986-A, pág. 229). Esta doctrina fue reiteradamente implementada por nuestro Alto Tribunal, en diversos fallos que tuve ocasión de señalar al votar, el 10 de abril de 1990, en autos "Huella S.A. c/ Dirección Nacional de recaudación Previsional-Organismo Regional" (cfr. Derecho del Trabajo, 1990-B, págs. 1445-1448). Vale decir que el requisito del depósito previo de la suma que se impugna sólo cede ante el caso de hallarnos frente a una cantidad de dinero desproporcionada con relación a la capacidad económica del apelante, situación que ha de quedar fehacientemente demostrada por éste.

Cumple destacar que, en mi opinión, no se encuentra acreditada en autos la imposibilidad alegada por el actor para cumplir con el depósito de marras. En tal sentido, observo que el firmante de la declaración contable de fs.43 señala que ha constatado los datos con base en una declaración preparada por el actor y bajo exclusiva responsabilidad de éste. A continuación, manifiesta que "las tareas realizadas no me permiten determinar la existencia de otros ingresos no declarados".

Por ello, estimo correspondería desestimar el recurso intentado. Costas por su orden en razón de que el accionante pudo pensar, razonablemente que asistía razón a su planteo (art. 68, segundo párrafo del CPCCN).V2

**EL DR. NESTOR A. FASCILO DIJO:**

I.

Que contra la Res. 761/17 (DV TJSN) del 24.11.2017 por la que el organismo desestimó la impugnación del contribuyente y, en consecuencia, confirmo la deuda intimada mediante Actas de Inspección e Infracción labradas bajo la OI 1610376, respecto de Díaz Mirta Ramona por los períodos 10/95 a 12/02, se dirige el recurso de apelación de fs. 27/41 recibido por la AFIP el 1.03.2018, en el que además plantea prescripción liberatoria.

II.

La nota de remisión de las actuaciones de fs. 77 da cuenta que el apelante no acreditó el depósito de la deuda según los preceptuado por los arts. 15 de la ley 18820 y 26 inc. b) de la ley 24463, exigencia de la cual el contribuyente pretende ser eximida, cuestión que ha de ser analizada liminarmente de manera de dilucidar la admisibilidad del remedio intentado.

En este orden de cosas es oportuno precisar que, conforme lo sostenido por el Alto Tribunal en reiteradas oportunidades, si bien el cumplimiento del recaudo apuntado resulta indispensable para la viabilidad del recurso de apelación, sin que ello importe una restricción inconstitucional a las garantías de igualdad y de defensa en juicio (Fallos 155:96; 162:363; 235:479; 238:418; 247:181; 261:101; y sus citas: 288:287; 296:57 entre otros), existen situaciones que quedan comprendidas dentro de las hipótesis de excepción que la doctrina de aquella así ha considerado: desproporcionada magnitud del monto del depósito con relación a la concreta capacidad económica del apelante, que torna ilusorio su derecho en razón del importante desapoderamiento que podría significar su cumplimiento (CSJN., Fallos 247:181; 250:208 y fallo allí citado; ídem Mussio Hnos S.A. s/Impugnación actas de inspección", sent. del 25.3.86, y específicamente, dictamen del señor Procurador General de la Nación Argentina del 26/7/85, consid. IV), el supuesto de monto excepcional y falta comprobada e inculpable de los medios para enfrentar su erogación (Fallos 256:38; 261:101), y cuando a través del requerimiento de esta clase de recaudos se revele en modo inmediato e inequívoco un propósito persecutorio o desviación de poder de parte de los órganos administrativos de aplicación (Fallos 288:287, consid. 10).

A mi juicio, corresponde eximir al *sub examine* del depósito aludido toda vez que se configura en autos esta última circunstancia, pues, en las particulares circunstancias de esta causa en que, como se verá, la accionada persigue el cobro de una deuda de muy vieja data, que en su totalidad se halla prescripta, corresponde declarar habilitada esta instancia y conocer del caso. (Cfr. sentencia

USO OFICIAL

Fecha de firma: 14/02/2020

Alta en sistema: 21/02/2020

Firmado por: NESTOR ALBERTO FASCILOLO, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARTIN LACLAU, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: RODOLFO MARIO MILANO, JUEZ DE CAMARA -Subrogante-

Firmado(ante mi) por: ELOY ANIBAL NILSSON, SECRETARIO DE CAMARA



#33171884#254262063#20200204111052856

interlocutoria nro. 90118 del 21.2.06 in re 27078/04 “San Timoteo S.A. c/AFIP-DGI s/impugnación de deuda).

III.

Despejados los óbices formales a la procedencia del remedio intentado, cabe circunscribir el análisis a la cuestión litigiosa a resolver, es decir, si se encuentra o no prescripta la acción ejercitada por el organismo para percibir los aportes y contribuciones correspondientes a los períodos que van de **octubre de 95 a diciembre de 2002** (mediante Actas de Inspección e Infracción labradas bajo la OI Nro. 1.610.376) notificada al contribuyente el 12.09.2017 (cfr. constancia de fs. 18 de la actuación Nro. 16957-4952-2017 que corre por cuerda al ppal.), y motivada en la toma de conocimiento de la sentencia definitiva nro. 2370 del 28.11.07 del Juzgado Nacional del Trabajo nro. 73 recaída en el expediente 2361/03 “Díaz Mirta Ramona c/ EQUIPHOTEL S.A. y otros s/despido”.

Vale reiterar que el organismo en las actuaciones determinó deuda, intereses y multa en las Actas de Inspección e infracción labradas bajo la OI N° 1.610.376 respecto de la Sra. Díaz Mirta Ramona (CUIL 27-04899393-7) en concepto de empleada no declarada.

IV.

Antes de avocarme al tema de fondo, vale aclarar que sin perjuicio de la entrada en vigencia a partir de 1.08.2015 del Código Civil y Comercial da la Nación aprobado por la ley 26.994 (art. 1 de la ley 27.077), en atención a los períodos fiscales reclamados en el *sub lite* y la noción de consumo jurídico, habrá de juzgarse en cuanto resulte pertinente por las normas del Código Civil ley 340 y sus modificatorias (cfr. CSJN *in re*: CSJ 4930/2015/RH1 “Volkswagen de Ahorro para Fines determinados S.A. c/Provincia de Misiones –Dirección General de Rentas y otro s/demanda contencioso administrativa”, del 5.11.2019).

V.

En ese cometido y tal como he sostenido en casos análogos al presente (ver sentencia definitiva nro. 109259 del 9.8.05 in re 11818/04 “Editorial Perfil S.A. c/AFIP- DGI s/impugnación de deuda”, publicada en La Ley, diario del 9.3.06 pág. 4 y ss. y S.D. nro. 111693 del 20.3.06 en la causa 13516/05 “Maitor SRL c/AFIP-DGI s/impugnación de deuda”), he de comenzar por destacar que el organismo cuenta con amplias facultades de control y fiscalización cuyo ejercicio es independiente del accionar de los particulares afectados. En efecto, aún sin que medie denuncia del trabajador o sentencia judicial que reconozca el carácter laboral de una relación, es común que la D.G.I. labre actas y formule cargos contra presuntos empleadores deudores, de modo que el fraude que este pueda cometer no constituye un impedimento para su accionar. Por lo demás, en caso de mediar cuestionamiento del administrado contra la resolución que desestimó su impugnación, compete a este Tribunal resolver sobre el fondo del asunto, aunque para ello sea necesario dilucidar si corresponde admitir o excluir del ámbito del derecho laboral a la relación jurídica habida entre las partes.

Por otra parte, en lo que hace al cómputo de la prescripción liberatoria habrá de estarse a lo dispuesto por el art. 4017 C.C., en cuanto alude al tema en los siguientes términos: “por solo el silencio o inacción del acreedor, por el tiempo designado por la ley, queda el deudor libre de toda obligación. Para esta prescripción no es preciso justo título ni buena fe”. De ello se desprende que la eficacia de la prescripción “es independiente de la buena o mala fe del deudor”, como afirma Llambías en el Tratado de Derecho Civil - Obligaciones III, Ed. Perrot, pág. 311, quien agrega: “A diferencia del derecho canónico en que la prescripción sólo es alegable por el deudor de buena fe..., en nuestro derecho ese es un factor irrelevante”, ponderando ese criterio legal “por cuanto el fundamento de la prescripción es la utilidad social que resulta igualmente servida, aunque el deudor tenga conciencia de la subsistencia de su deuda, o sea tenga mala fe”.

Así las cosas, considero que el cómputo que se trata de las acciones por cobro de contribuciones, aportes, multas y demás obligaciones emergentes de las leyes de previsión social se produce a los diez años de su devengamiento con arreglo a lo dispuesto por el primer párrafo del art. 16 de la ley 14236, de manera que, en el *sub examine*, resultan alcanzadas por la excepción los créditos originados con anterioridad a los diez años previos al reclamo.

En este orden considero que no se configuró en autos una situación de dificultad o imposibilidad de hecho de la naturaleza exigida por el art. 3980 C.C. t.o. cfr. Ley 17711 -disposición en que se ampara el organismo-, que hubiere impedido temporalmente el ejercicio de la acción, como para justificar que judicialmente se libere al acreedor de las consecuencias de la prescripción cumplida durante el impedimento, a condición de que después de su cesación el acreedor hubiese hecho valer sus derechos en el término de tres meses.

Esto es así por cuanto para la procedencia de la dispensa en tratamiento se exige, en primer lugar, que la imposibilidad de obrar provenga de la “existencia de fuerza mayor”, toda vez que “no cualquier dificultad, o imposibilidad” puede justificarla. En otras palabras, el impedimento de mentas “debe ser de carácter extraordinario y asimilable a los supuestos del caso fortuito o fuerza mayor”, cfr. Trigo Represas y López Mesa en “Código Civil y Leyes Complementarias Anotados”, IV-B, Ed. Depalma, 1999, pág. 307.

Por ello, coincido con la tendencia marcada por la jurisprudencia y puesta de resalto por esos autores, según la cual la dispensa en análisis “debe ser aplicada con criterio restrictivo, al estar inspirada en los principios del caso fortuito y de la fuerza mayor como causa de exoneración de responsabilidad, no siendo, en principio, alegable cuando mediaron únicamente dificultades subjetivas” (op. citada, pág. 308).

Asimismo considero que la conducta del acreedor no es ajena al vencimiento del plazo de la prescripción liberatoria, puesto que -como ocurre con habitualidad- en ejercicio de sus facultades de fiscalización y verificación, bien pudo haber promovido el reclamo que ahora persigue en tiempo oportuno con prescindencia de la existencia o no de una causa judicial interpuesta por la trabajadora. En otras palabras, no ha sido acreditado que el organismo recaudador ejerció en debida forma las



USO OFICIAL

# Poder Judicial de la Nación

atribuciones que le son propias o que, habiéndolo hecho, no pudo llegar a un resultado acertado en virtud del ocultamiento del empleador (C.N.Civ. Sala C, 6.5.86, L.L. 1987 - A - 241 y E.D. t. 119 pág. 265).

Por lo demás, en la hipótesis de admitirse que el organismo no estuvo en condiciones de accionar hasta la toma de conocimiento de la sentencia dictada en una causa laboral de la que fue notificado de acuerdo a lo previsto por el último párrafo del art. 132 de la ley 18345 -que fuera agregado por el art. 46 de la ley 25345-, se trataría de una imposibilidad jurídica de obrar y no de una dificultad o imposibilidad de hecho, supuesto que no resulta alcanzado por el art. 3980 C.C. (Ver op. Trigo Represas y López Mesa, op. cit., pág. 310).

En síntesis, sin que ello importe alentar actitudes evasivas de los obligados al depósito de aportes y contribuciones, considero que la aplicación del derecho vigente a las constancias de la causa, cimentado en la preservación del valor de seguridad jurídica al que apunta el instituto de la prescripción liberatoria, no permite hacer excepción a la regla contenida por el art. 4017 C.C..

Por lo arriba expresado, concluyo que cabe hacer lugar a la prescripción opuesta por los créditos reclamados por períodos anteriores a los diez años previos al 12.09.2017, fecha en la que los instrumentos que dieron origen a las presentes actuaciones fueron notificados a la empresa mediante F. 8400/L Nº 0000002017049810302. De tal modo, se declaran prescriptos los créditos devengados por los períodos 10/95 a 12/02, que son objeto de reclamo en los obrados, resultando irrelevantes -a su respecto- los efectos de la suspensión del curso de la prescripción por un año dispuesta por el art. 10 de la ley 24587 (B.O. 22.11.95).

En consecuencia, han de ser dejados sin efecto los cargos formulados y sus accesorios.

Lo así resuelto se compadece con lo decidido en casos análogos por este Tribunal por sentencia interlocutoria nro. 90118 del 21.02.06, in re expte. nro. 27078/04 "San Timoteo S.A. c/ Administración Federal de Ingresos Públicos- D.G.I. s/ Impugnación de Deuda".

VI.

En lo concerniente a las restantes cuestiones alegadas en el escrito de apelación omito pronunciarme por considerarlas inconducentes para la solución del conflicto suscitado en autos. En tal sentido, la Corte Suprema de Justicia Nación ha señalado que "los jueces no están obligados a seguir y decidir todas las alegaciones de las partes, sino sólo a tomar en cuenta lo que estiman pertinente para la correcta solución del litigio" (cfr. "Tolosa, Juan C. c/ Compañía Argentina de Televisión S.A", fallado el 30.4.74, pub. L.L., To. 155, pág. 750, nº 385). De esta suerte, se reitera una doctrina expuesta en múltiples ocasiones, merced a la cual se exime al juzgador de tratar todas las cuestiones expuestas por los litigantes y de analizar los argumentos que, a su juicio, no sean decisivos ( Fallos: 272:225; 274:113; entre otros).

Por lo expuesto, propongo: 1) declarar formalmente admisible el recurso deducido; 2) hacer lugar al mismo y, por ello, declarar la prescripción opuesta por los créditos reclamados mediante Actas de Inspección e Infracción labradas bajo la OI Nº 1610376 y, en consecuencia, revocar la resolución 761/17 (DV TJSN); y 3) costas por su orden en atención a la particularidad del caso (art. 68, segundo párrafo, del CPCCN). Naf

**EL DR. RODOLFO MARIO MILANO DIJO:**

Que adhiere a las conclusiones del voto del Dr. Fasciolo.

Por lo que resulta del acuerdo de la mayoría, el Tribunal **RESUELVE:** 1) declarar formalmente admisible el recurso deducido; 2) hacer lugar al mismo y, por ello, declarar la prescripción opuesta por los créditos reclamados mediante Actas de Inspección e Infracción labradas bajo la OI Nº 1610376 y, en consecuencia, revocar la resolución 761/17 (DV TJSN); y 3) costas por su orden en atención a la particularidad del caso (art. 68, segundo párrafo, del CPCCN).

Cópiese, protocolícese, notifíquese, cúmplase con la comunicación dispuesta por la CSJN en la Acordada 15/13 (p.4 y conc.) y, oportunamente, remítase.

RODOLFO MARIO MILANO  
JUEZ DE CAMARA  
-SUBROGANTE-

NESTOR A. FASCIOLO  
JUEZ DE CAMARA

MARTIN LACLAU  
JUEZ DE CAMARA

ANTE MI:

ELOY A. NILSSON  
SECRETARIO DE CAMARA

JAVIER B. PICONE  
SECRETARIO DE CAMARA

